



Bogotá, doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA:

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE: JOSÉ LEONARDO CALDERÓN SANDOVAL.

DEMANDADO: ENTERRITORIO – EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL.

RADICACION: 11001-33-35-010-2020-00271-00

I. Habiéndose fijado dentro del presente expediente fecha para la celebración de la audiencia inicial contemplada en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para el **trece (13) de septiembre de dos mil veintidós (2022)** a las **nueve de la mañana (09:00 AM)**, este Despacho advierte que es menester dar aplicación al artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, que reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 207. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarreen nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.”

II. El Juzgado considera necesario efectuar un control de legalidad a lo actuado en el presente proceso, como quiera que en aplicación del criterio orgánico (naturaleza jurídica de la entidad demandada en esta controversia) y por la naturaleza del conflicto, llevan a la conclusión de que esta jurisdicción no es la encargada para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

En efecto, el proceso de la referencia se adelanta en contra de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL –ENTERRITORIO- (antes FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE), que a la luz del **artículo 1° del Decreto 495 de 2019**, tiene las siguientes características:

ARTÍCULO 1. Denominación, Naturaleza y Domicilio. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE - **Empresa Industrial y Comercial del Estado** de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia Financiera, se denominara, en adelante, Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio y tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C."

Al tratarse de una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla una actividad económica que se regula por las reglas del derecho privado¹, es menester precisar que las personas que prestan en dichas entidades son considerados **trabajadores oficiales vinculados a través de un contrato de trabajo**, salvo las

¹ La Ley 489 de 1998 en su artículo 85, dispone: "ARTÍCULO 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características. (...)"



actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos².

Dado que en el presente asunto la entidad demandada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado lo que implica que las personas vinculadas laboralmente con su actividad son trabajadores oficiales y que, según los hechos de la demanda, el actor realizó actividades referentes al control de calidad, es forzoso concluir que sus labores no se enmarcan dentro de los cargos de dirección y confianza que puedan ser asimiladas como las desempeñadas por empleados públicos.

Por lo tanto, este Despacho advierte que carece de competencia para resolver el presente asunto, toda vez que conforme el artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, los jueces administrativos tienen competencia para resolver asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que **no provengan de un contrato de trabajo**, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía. Disposición que debe ser leída armónicamente con el numeral 4 del artículo 104 ibídem, que le asignó a esta jurisdicción la competencia para conocer de los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre servidores públicos y el Estado, así como la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

III. A la luz del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 que reformó el Código Procesal del Trabajo, la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce entre otros de los conflictos jurídicos que **se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo**. Por lo tanto, es dicha jurisdicción es la encargada de resolver la presente controversia relativa a la presunta existencia de una relación laboral encubierta entre las partes.

IV. Póngase de presente que el Código General del Proceso, en su artículo 100, numeral 1, contempla la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia y en su artículo 101 señala que si esta prospera, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez.

Así mismo, ante la eventualidad de tener que declarar la falta de jurisdicción y competencia dentro del presente expediente, es imperativo traer a colación que la Corte Constitucional, en sentencia **C – 537 de 2016** al pronunciarse acerca de la nulidad por falta de jurisdicción o competencia fijó las siguientes reglas, **(i)** cuando el juez recibe una demanda que sea competencia de una jurisdicción diferente o, a pesar de pertenecer a su jurisdicción, el que no sea competente, deberá rechazarla, pero enviarla inmediatamente al competente; **(ii)** cuando luego de haber admitido la demanda, prospera la excepción de falta de jurisdicción o de falta de competencia, el

² “ARTÍCULO 5o. EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.”



juez deberá enviarla al competente, pero lo actuado conservará validez; **(iii)** cuando la nulidad procesal comprenda el auto admisorio de la demanda, no se afectará la interrupción de la prescripción, ni la inoperancia de la caducidad, si la nulidad no es atribuible al demandante, como cuando resulta de un error en la identificación del juez competente por complejidad del régimen o error de reparto; **(iv)** cuando en curso de un proceso, la competencia se altera, lo actuado conserva validez; **(v)** por último, si se declara la nulidad procesal por falta de jurisdicción o de competencia, el juez no podrá seguir actuando válidamente, pero lo actuado con anterioridad conserva valor.

Entonces, atendiendo las reglas constitucionales, cuando debe declararse la excepcion previa de falta de jurisdiccion y competencia, este juzgado ordenará la remision del presente expediente a la jurisdiccion ordinaria, en su especialidad laboral para que continuen conociendo del presente asunto, guardando validez las actuaciones surtidas al interior del plenario, en lo que no genere su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE:

PRIMERO. DECLARAR CONFIGURADA LA EXCEPCION PREVIA DE FALTA DE JURISDICCIÓN para conocer del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instaurado por **JOSÉ LEONARDO CALDERÓN SANDOVAL** contra **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio- (antes FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE)**, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Estimar que la competencia para conocer del asunto recae en la Jurisdicción Laboral Ordinaria.

TERCERO: Por Secretaría enviar el expediente a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá, para que por su conducto sea remitido a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Bogotá, con todos sus anexos, previas las anotaciones y registros a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

Jado

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz

Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e98ee1eecd7bb986a92f32aadccf7046adeb1aede33911af607e3ea283a5b93f**

Documento generado en 12/09/2022 11:27:20 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>